

1ª SESION EXTRAORDINARIA. 22 DE NOVIEMBRE DE 1902

PRESIDENCIA DEL DOCTOR URIBURU (J. E.)

SUMARIO:—Aprobación de un despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en los proyectos sobre **residencia de extranjeros** presentados por el Poder Ejecutivo y por el señor Senador Cané.

SEÑORES SENADORES En Buenos Aires, á los

Aparicio
Cané
Carbó
Del Campillo
Figuroa
Frigoyen
Maciá
Mantilla
Morón
Palacio
Pérez
Puccio
Quiroga
Terán
Uriburu (F.)

veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos dos, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente provisorio y los señores senadores al margen consignados y el señor Ministro del Interior, con inasistencia de los señores Benegas, Gálvez y Virasoro con licencia; Alvarez, Avellaneda, Díaz,

Doncel, Figuroa Alcorta, García, Herrera, Mendoza, Pellegrini, Santillán (Z.J.) y Santillán (J. D.), con aviso, dice el

Sr. Presidente—Está abierta la sesión con asistencia de diez y seis señores senadores.

Se ha convocado á la Cámara á fin de darle cuenta del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales que va á leerse.

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado los proyectos sobre residencia de extranjeros presentados por el Poder Ejecutivo y por el señor Senador doctor Cané y os aconseja, en substitución de aquéllos, la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación á todo extranjero que haya sido condenado ó sea perseguido por los tribunales extranjeros, por crímenes ó delitos de derecho común.

Art. 2º—El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional ó perturbe el orden público.

Art. 3º—El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República á todo extranjero cuyos antecedentes anteriores autoricen á incluirlos entre aquellos á que se refieren los dos artículos precedentes.

Art. 4º—El extranjero contra quien se haya decretado la exulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento de embarco.

Art. 5º—Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, noviembre 22 de 1902.

Domingo T. Pérez.—Enrique Carbó.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

De la admisión de extranjeros en el territorio de la república

Artículo 1º—El derecho de entrar y permanecer en el país, que la Constitución acuerda al extranjero, es correlativo de los deberes que las leyes le imponen, de manera que ningún extranjero podrá alegar derecho para permanecer en la República, fundado en el hecho de

que su acceso al territorio le había sido permitido.

Art. 2º—El Poder Ejecutivo podrá prohibir la entrada en el país de cualquier extranjero que se encuentre en las circunstancias siguientes:

- a) Ser un prófugo de una cárcel, ó un perseguido por una autoridad extranjera, acusado de haber cometido alguno de los delitos que dan lugar á la extradición, con arreglo á los tratados internacionales ó á los principios del derecho de gentes.
- b) Haber tomado parte en asonadas ó atentamientos anarquistas, en su propio país ó en cualquier otro.
- c) Estar afiliado á alguna de las sociedades secretas, conocidas universalmente con el nombre de "anarquistas".
- d) Haber sido condenado por delito común contra las personas ó la propiedad, y encontrarse aún sometido á la vigilancia policial, después de cumplida su pena aflictiva.

Art. 3º—Las averiguaciones y defensas á que den lugar los casos previstos en el artículo anterior, se harán breve y sumariamente, ante la autoridad administrativa que el Poder Ejecutivo designe, en el punto de arribo del extranjero, pudiéndose impedir su entrada en el territorio, hasta tanto se resuelva, por el Presidente de la República, lo que estime conveniente sobre su admisión. Si el buque que conduxere al extranjero peligroso debiera emprender viaje para el exterior antes de que aquella resolución se hubiese adoptado, el extranjero objeto de la investigación podrá optar entre permanecer detenido administrativamente, hasta tanto su caso se resuelva, ó salir en el mismo buque que lo trajó.

Art. 4º—Los extranjeros que al entrar en el territorio de la República por las fronteras mediterráneas sean objeto de alguna investigación á su respecto, podrán ser detenidos administrativamente, hasta tanto se resuelva sobre su admisión ó rechazo.

Art. 5º—El Presidente de la República podrá permitir la entrada en el territorio del país, de cualquier extranjero, comprendido en las limitaciones que determina la presente ley; y queda facultado en estos casos para señalarle el punto forzoso de su residencia, con la obligación de no abandonarlo, sin noticia y anuencia del Poder Ejecutivo.

Art. 6º—Los extranjeros cuya entrada en el territorio de la República no fuese permitida de acuerdo con esta ley, deberán ser embarcados en el mismo buque que los condujo, ó en otro de la empresa á que éste perteneciese, y por cuenta de ella, si él no prefiriese salir en otro buque.

Art. 7º—Si el Poder Ejecutivo no resolviese sobre la admisión ó rechazo de un extranjero, dentro de los cinco días siguientes á su arribo al país, aquel, por sí, ó cualquiera otra persona por él, podrá ocurrir al juez federal respectivo, pidiendo que su caso sea resuelto en los términos señalados por el Código de Procedimientos en materia criminal, para el recurso de *habeas corpus*. El juez federal resolverá, en mérito de los antecedentes que reciba, si el extranjero se encuentra ó no comprendido en los casos fijados en el artículo 2º, y declarará su admisión ó su rechazo del país.

CAPÍTULO II

De la residencia de los extranjeros

Art. 8º—El derecho de los extranjeros para residir en el territorio de la República estará sujeto á las prescripciones de la presente ley, sin perjuicio de los derechos civiles que les correspondan.

Art. 9º—Tendrán residencia política para los efectos de esta ley, los extranjeros que se encuentren en las condiciones siguientes:

- 1º—Que hubiesen residido en la República durante más de dos años, ocupados en algún trabajo comercial, industrial, científico, profesional ó artístico.
- 2º—Que hubiesen sido durante el mismo tiempo, sin soluciones de continuidad por ausencias temporales, jornaleros, peones de labranza ó personas ocupadas en el servicio doméstico.
- 3º—Que se hubiesen casado con mujer argentina, y hubiesen tenido al menos un hijo nacido en el país.
- 4º—Que se hubiesen casado con mujer argentina, aunque no tuviesen hijos, teniendo residencia inmediata mayor de un año.
- 5º—Que tuviesen bienes raíces propios en la República Argentina, ó casa comercial, ó establecimiento industrial ó agrícola que represente un capital mínimo de pesos 25,000 moneda nacional.
- 6º—Que hubiesen prestado servicio militar á la Nación.
- 7º—Que hubiesen solicitado, con derecho, carta de ciudadanía argentina, aun cuando no la hubiesen obtenido por demora en la tramitación.

CAPÍTULO III

De la remoción y expulsión de los extranjeros

Art. 10—Los extranjeros que hubiesen sido condenados por algún delito que haya merecido pena de presidio ó penitenciaria, ó como reincidentes por cualquier delito contra la propiedad, podrán ser expulsados del territorio de la República, una vez que hayan cumplido su condena. A los efectos de este artículo, los gobiernos de provincia comunicarán al Ministro del Interior, la nómina de los extranjeros que se encuentren en las condiciones indicadas, debiendo acompañar los antecedentes del caso, é informar sobre la persona del extranjero, haciéndolo en tiempo oportuno para que el Presidente pueda resolver lo conveniente, antes de que la pena se haya extinguido.

Art. 11—Los extranjeros que, después de haber entrado en el territorio de la República, se hiciesen peligrosos por sus actos ó propaganda para la tranquilidad ó el orden público de la Nación, ó conspirasen contra algún gobierno extranjero desde el territorio argentino, y los que se hallasen ó incurriesen en alguno de los casos enumerados en el artículo 2º de la presente ley, podrán ser obligados á alejarse de un lugar determinado de la República, ó á residir en otro, ó á salir del territorio nacional por el término que se señale por decreto del Poder Ejecutivo.

Art. 12—La facultad de remover, dentro del territorio, ó de expulsar de él á los extranjeros, pertenece al Presidente de la República, quien podrá hacer uso de ella, sin dar los motivos y

fundamentos de la medida, sin más limitaciones que las siguientes:

1º—Cuando se trate de los extranjeros no comprendidos en el artículo 10, podrá removerlos de un punto á otro de la República, pero no expulsarlos, á no ser que, en el lugar á donde hubiesen sido removidos, continuasen haciéndose peligrosos para la seguridad y el orden públicos.

2º—Cuando la persona de quien se trate hubiese sido reclamada por algún gobierno extranjero, y su extradición fuese negada por los tribunales argentinos. En este caso el Poder Ejecutivo podrá remover al extranjero de un punto á otro de la República, pero no expulsarlo.

Art. 13—En todos los casos en que se decreta la remoción de un extranjero, éste tendrá derecho á salir del país por su cuenta, sin que pueda regresar á él sin permiso del Poder Ejecutivo.

Art. 14—No será procedente ante los tribunales la acción de amparo de la libertad, cuando se trate de decretos del Poder Ejecutivo, removiendo ó expulsando extranjeros.

Art. 15—Los Jueces de Sección no despacharán cartas de ciudadanía argentina solicitadas por extranjeros sujetos á un decreto de remoción ó expulsión.

Art. 16—Los gobernadores de las provincias y de los Territorios Nacionales, podrán solicitar del Presidente de la República la expulsión ó remoción de los extranjeros que, por su conducta se hagan peligrosos para la seguridad ó el orden públicos de sus respectivos territorios, ó que se hallen en las condiciones de los artículos 2º y 11 de la presente ley.

Art. 17—El extranjero contra quien se haya dictado un decreto de remoción de un punto á otro de la República, deberá efectuarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes; y aquel contra quien se decretase la expulsión, deberá abandonar el territorio nacional dentro de los tres días posteriores á la orden de salida. Sin embargo, en uno y otro caso, el Poder Ejecutivo podrá, como medida preventiva, ordenar la vigilancia policial ó la detención del extranjero objeto de aquellas medidas, hasta que llegue el momento en que deban cumplirlas.

Art. 18—Todo extranjero removido ó expulsado que, violando la prohibición que le hubiese sido impuesta, regresase al territorio de donde fué removido, ó al país, será aprehendido y sometido al Juez Federal respectivo, quien comprobará, en juicio sumario, los hechos, y siendo ciertos, aplicará á los infractores la pena de tres á seis meses de arresto. Cumplida aquélla, el extranjero infractor, será removido ó expulsado por la fuerza pública. Si reincidiese, la pena será de tres á seis años de prisión.

Art. 19—El Presidente de la República podrá, en cualquier momento y sin motivar la medida, dejar sin efecto las órdenes de expulsión dictadas contra cualquier extranjero.

Art. 20—No están comprendidos en las disposiciones de esta ley, los derechos y garantías reconocidos á los extranjeros por los tratados internacionales, ni los casos de extradición que corresponden á la jurisdicción de los tribunales federales.

Art. 21—Esta ley no es aplicable personalmente á las mujeres, pero los extranjeros expulsados, podrán exigir que sus esposas ó hijos menores, les acompañen á salir del territorio argentino, sin perjuicio de los derechos de los

cónyuges regidos por la ley de el Código civil de la República.

Art. 22—Comuníquese al Poder Ejecutivo,

FEELIPE YOFRE.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El Poder Ejecutivo podrá, por decreto, ordenar la salida del territorio de la Nación, á todo extranjero que haya sido condenado ó sea perseguido por los tribunales nacionales ó extranjeros, por crímenes ó delitos de derecho común.

Art. 2º—El Presidente de la República, en acuerdo de ministros, podrá ordenar la expulsión de todo extranjero cuya conducta pueda comprometer la seguridad nacional, turbar el orden público ó la tranquilidad social.

Art. 3º—El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República á todo extranjero cuyos antecedentes autoricen á incluirle entre aquellos á que se refieren los dos artículos precedentes.

Art. 4º—Todo extranjero que, después de su expulsión del territorio nacional, regrese al mismo, sin permiso del Poder Ejecutivo (otorgado en acuerdo de ministros para los expulsados en virtud del artículo 2º) será deferido á los tribunales y condenado á prisión de uno á seis meses. Después de purgada la pena, será nuevamente expulsado.

Art. 5º—El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.

Art. 6º—Comuníquese, etc.

Miguel Cané.

Sr. Presidente—Dado el carácter que reviste este despacho, si á la Cámara le parece bien se puede tratar inmediatamente.

Sr. Maciá—Hago moción para que se trate sobre tablas.

—Suficientemente apoyada esta moción, se vota y es aprobada.

—Entran al recinto y ocupan sus bancas los señores ministros del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, doctores Joaquín V. González, Marco Avellaneda y Agustín Drago.

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Pérez—Pido palabra.

Se comprenderá fácilmente que habiendo la Comisión de Negocios Constitucionales en este asunto hace pocos momentos habiendo sido sancionada la ley acaba de formular el señor Drago por Entre Ríos, de ser tratado sobre tablas, la Comisión no

ha podido preparar todos los elementos necesarios de juicio para fundar su dictamen con la detención y con el maduro razonamiento que hubiera deseado, tratándose de un asunto que reviste indudablemente mucha gravedad. De consiguiente, principiaré por pedir disculpa al honorable Senado si en este informe improvisado, que tiene que ser conciso, no diera todas las razones y todos los motivos, que en otras circunstancias y con más tiempo habría podido exponer, para fundar el despacho de la Comisión.

Este es un asunto conocido de la honorable Cámara; tuvo su origen en un proyecto presentado hace más de un año por mi distinguido colega el doctor Cané, que mereció el estudio detenido de parte de la Comisión de Negocios Constitucionales en aquella época, á la cual tuve también el honor de pertenecer.

Muchas conferencias se celebraron con el autor del proyecto, á las que asistieron varios de los ministros del Poder Ejecutivo, y no se pudo arribar á una solución, porque discusiones doctrinarias, debates de principios, cuestiones constitucionales que se suscitaron, impidieron llegar á una fórmula definitiva, á fin de presentar en forma de despacho de Comisión el pensamiento y el propósito que envuelve el proyecto.

El Poder Ejecutivo presentó, en consecuencia, un proyecto, siendo Ministro del Interior el doctor Yofre, proyecto que también ha tomado en consideración la Comisión de Negocios Constitucionales; pero que no ha podido servir de base para su dictamen porque lo ha encontrado, permítaseme la palabra, un tanto lírico y de aplicación muy difícil y confusa, tratándose de una ley que debe ser clara, precisa, ejecutiva y eficaz. Entonces, la Comisión se ha guiado en su despacho por el proyecto del señor Senador Cané, que consulta perfectamente la idea que debe informar esta ley.

Se trata de una ley eminentemente

política, de una ley de excepción y de prevención, destinada á evitar que ciertos elementos extraños vengán á turbar el orden público, á comprometer la seguridad nacional; y digo que es una ley eminentemente política, porque no puede ser de otra manera, desde que se trata de tomar medidas ejecutivas, de carácter policial, para salvar la tranquilidad social, comprometida por movimientos esencialmente subversivos; que no son los movimientos tranquilos del obrero trabajador, ni del extranjero honrado, que buscan en la huelga el medio de satisfacer justos anhelos; sino agitaciones violentas, excesos y perturbaciones producidas por determinados individuos que viven dentro de la masa trabajadora para explotarla, abusando así de la hospitalidad generosa que les brinda este país, donde el extranjero goza de tantas franquicias y disfruta de tanta libertad.

No se trata de dictar una ley contra las huelgas, cosa que jamás habría pasado por mi mente proponer, porque ellas pueden ser saludables para resolver en un momento dado, en circunstancias especiales, esos graves problemas sociales, que se traducen en esa lucha entre el capital y el trabajo; se trata de evitar los abusos, de prevenir hechos criminales que se producen á la sombra de la huelga; se trata de salvar á la sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses en un país debidamente constituido.

Entonces, es natural que el Poder Ejecutivo esté armado de esta ley de defensa para conjurar esos peligros, asegurando en todo tiempo la tranquilidad y el bienestar de la comunidad.

Todas las naciones, señor Presidente, están armadas de esta facultad; y los países, como Norte América, que tienen instituciones análogas á las nuestras, y que son un modelo de libertad, se han pronunciado ya por el órgano de sus poderes judiciales en el sentido de establecer la doctrina, de que esta facultad

debe ser privativa y debe ser ejercitada por el Poder Ejecutivo.

Conferirla al poder judicial, cuyos procedimientos lentos, cuyas tramitaciones morosas, pueden hacer ineficaz la acción de esta ley, sería simplemente buscar un remedio muy tardío para curar un mal que es necesario atacar rápidamente.

Las circunstancias son graves: todos los señores senadores conocen lo que pasa en este momento en la Capital, lo que amenaza suceder en el resto de la República. Este movimiento de huelga, sin duda promovido por agitadores que explotan la buena fe de los gremios trabajadores, tiende á tomar proporciones tan graves, señor Presidente, que puede llegar á comprometer todas las manifestaciones de la vida comercial, industrial y económica de la Nación.

El comercio está sufriendo serios inconvenientes con esta huelga; la cosecha misma, señor Presidente, que representa la riqueza nacional, que tantas esperanzas despierta para mejorar nuestro estado financiero; la misma renta de aduana comprometida; todo, todo esto está amenazado, señor Presidente.

¿Por qué? ¿Porque el elemento obrero, el obrero honesto y trabajador conscientemente se levanta para impedir todo tráfico, para impedir que se haga la cosecha, para evitar por medios violentos que trabaje el que quiere trabajar? Nó, señor Presidente; es porque hay, en el seno de ese elemento sano y útil explotadores que viven de esta agitación; porque hay verdaderos empresarios de huelgas. Y es preciso decirlo bien alto—lo digo sin miedo—que viven de esta industria criminal, ocupados en impulsar estas oleadas de hombres á excesos que son la negación del derecho y de la libertad que invocan para proceder así.

Agrupaciones de hombres que las más de las veces ceden á las amenazas con que se les intimida.

Señor Presidente: todos los señores

senadores han tenido ocasión de leer el notable folleto del verdadero autor de este proyecto, publicado á raíz de su presentación. En él están expuestos con toda claridad, de una manera elocuentísima, todos los fundamentos que yo pudiera dar en favor del dictamen que ha presentado la Comisión.

Yo habría sido más extenso, habría podido en este informe hacer citas de ese mismo folleto que ni siquiera tengo aquí á la mano; pero, me parece que, con lo dicho, he fundado lo más brevemente posible el proyecto que acaba de presentar la Comisión á la consideración del honorable Senado.

He dicho.

—¡Muy bien!

Sr. Cané—Pido la palabra.

Sr. Mantilla—Pido la palabra.

He concurrido á esta sesión para compartir con mis colegas la responsabilidad del Senado, cualquiera que sea la ley dictada por él; pero no participo de las opiniones expuestas por el miembro informante á nombre de la Comisión de Negocios Constitucionales, ni estimo correcto el proyecto en discusión.

Daré las razones de mi disenso, sin embargo de que mi situación es desventajosa para hacerlo conforme cuadra al asunto: todo conspira para que ella sea desairada en relación al estudio que supongo en los miembros de la Comisión y á la preparación del autor del proyecto primitivo.

De improviso no es posible hablar con suficiencia completa, con el acopio de conocimientos y la madurez de juicio que han menester problemas de la naturaleza de los comprendidos en el proyecto. La ley belga sobre expulsión de extranjeros, de las últimas y mejores dadas en Europa, fué discutida, me parece, cerca de un mes; concurriendo á los debates lo más granado del parlamento, y oyóse en él, y también afuera de él, el máximum—si es permitido decir—de la sabiduría de los hombres de

Estado de aquel país. Nosotros tratamos este proyecto sobre tablas, improvisando; la misma Comisión que le despacha declara espontáneamente que no está habilitada para informar con la detención y madurez que habría deseado. Es natural, pues, mi situación desventajosa para exponer con amplitud mi tesis.

El momento no es propicio á una cuestión tan grave como la promovida. Las medidas de excepción, las leyes de esta índole, deben ser estudiadas con espíritu absolutamente sereno y no tratadas y despachadas á la ligera bajo la presión de circunstancias intranquilas ó violentas, que en la mayor parte de las veces perturban la serenidad indispensable del juicio y precipitan al error.

Los antecedentes del proyecto confirman mi opinión. El señor Senador por la Capital, doctor Cané, le presentó há más de dos años, fundándole con discurso breve, porque se refirió expresamente á un libro escrito para sostener su proyecto. (Llamo *libro* á este pequeño volumen, que otros denominan *folleto*, por su contenido, que es de gran valor, expuesto con alta lealtad, que presenta sin reservas todo lo favorable y lo desfavorable al proyecto, á fin de que fuera plena la conciencia formada sobre el trabajo). La Comisión de Negocios Constitucionales, á cuyo estudio pasó, consideró muy grave el proyecto, demasiado comprometedor: él afectaba á la Constitución en muchos de sus principios fundamentales; á los tratados internacionales, que son leyes de la Nación; á la inmigración, que es necesidad ineludible del país. Esa apreciación inclinó al estudio tranquilo del problema y á la reserva de hecho del proyecto. Entonces, también, el actual Gobierno, con otro Ministro del Interior, pensó como la Comisión del Senado y gran parte de los senadores, y presentó otro proyecto, de estructura diversa, que respondía á hechos, doctrinas y leyes que entendía debían ser salvadas, y que no

lo estaban en el primero. Ambos procedimientos eran prudentes.

La Comisión de Negocios Constitucionales, se me antoja, impelida por una situación transitoria, que declara grave, encuentra ahora hacedero y fácil lo que antes le pareciera difícil y comprometedor, puesto que se pronuncia, con ligeras variaciones, por el proyecto del señor Senador Cané; el Gobierno, á su vez, desestima de hecho su proyecto y ampara el que antes desaprobó.

Aquellos antecedentes demuestran la gravedad de la cuestión planteada y evidencian que mi juicio sobre la manera de estudiarla es el mismo prudente de antes de la Comisión de Negocios Constitucionales y del Gobierno. Correspondería, pues, según ellos, no precipitarnos á improvisar. Pero, no es esta la opinión del Senado, y me someto á ella.

«Esta es una ley política de excepción» —nos decía el señor Senador miembro informante.

¿Por qué ley de excepción, la que debe ser permanente y normal? Sobre todo ¿por qué ley política?

El mismo señor Senador agregaba: «Porque es de defensa contra un peligro público, que consiste en la acción de empresarios de huelgas, perturbadores de la tranquilidad de los trabajadores.»

Me explico y acepto el propósito de sancionar una ley de defensa pública, de defensa social, de naturaleza permanente, que consulte los intereses generales de la Nación y se armonice con los miliarios puestos en nuestra Constitución para que ésta sea realmente efectiva en sus grandes fines; pero no comprendo, no es posible, una ley política de excepción sobre los extranjeros.

Reconozco que el derecho de expulsar á los extranjeros deriva de la soberanía nacional; que el ejercicio de él debe responder á la selección de los elementos extraños; que el Congreso tiene atribuciones para hacer efec-

tivo dicho derecho en defensa del orden público ó del orden social, procediendo contra los perturbadores de ellos. Pero de estos principios no surge, no es lógico deducir, que tengamos de otorgar al Poder Ejecutivo las facultades extraordinarias consignadas en el proyecto, que son de las expresamente prohibidas por la Constitución. Esa concesión no se hará jamás con el voto consciente de este Senador por Corrientes.

No há menester el Poder Ejecutivo de una ley agravante para defender á la sociedad, para mantener el orden público. Si la conmoción perturbadora que ha esbozado el señor Senador por Jujuy se parece en los hechos á alguno de los cuadros de la Divina Comedia, venga el Gobierno con el pedido del estado de sitio, que es procedimiento constitucional de defensa, seguro de que será atendido. La ley no producirá la desaparición de las huelgas, que alarman, porque, según lo ha manifestado el señor miembro informante, no se da contra ellas. No es, pues, necesaria hoy; no responde, pues, á la defensa social ahora requerida.

Como ley de defensa permanente, para todos los tiempos, el proyecto choca con los principios, libertades, garantías y derechos establecidos por la Constitución, al amparo de los cuales está abierta la República á todos los hombres de la tierra.

La Constitución, las leyes, los poderes públicos de la Nación han sido creados para el bien de los habitantes y nó de los ciudadanos únicamente; éstos y los extranjeros tienen los mismos jueces, de los que no pueden ser sacados, libertades y derechos comunes de los que no pueden ser arbitrariamente privados los unos. ¿En virtud de qué justicia, de qué atribución constitucional, establecería ahora el Congreso, bajo la impresión del miedo, la diferencia entre ciudadanos y extranjeros, que resulta del proyecto, al conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y judiciales

sobre los últimos? Esta no sería defensa legítima nuestra, ni defensa tampoco. Con serenidad, con ecuanimidad, consultando y respetando la Constitución cabe una ley de legítima defensa, que no desconozca derechos y libertades á cuyo amparo han venido y viven los extranjeros.

La doctrina norteamericana á que se ha referido el señor miembro informante no es como él la expone. La Corte Suprema de los Estados Unidos no ha declarado que corresponde genuina y exclusivamente al Poder Ejecutivo—solamente á él y de ninguna suerte al poder judicial—el juzgamiento de los casos de expulsión de extranjeros; la Corte declaró que era constitucional la ley contra los chinos (que no es como el proyecto); pero no dió declaración absoluta, ni relativa sobre facultades judiciales del Poder Ejecutivo, y facultades excluyentes.

El proyecto en discusión está inspirado por el deseo, el propósito, de que el Poder Ejecutivo sea el único que debe pensar, resolver y ejecutar la expulsión de los extranjeros; vale decir: acusador, juez y ejecutor de su propia sentencia. Cuando el Poder Ejecutivo tuviere de proceder en virtud de las facultades que el proyecto convertido en ley le acordaría, violaría los siguientes principios de la Constitución:

«Ningún habitante de la Nación puede ser sacado de sus jueces ordinarios, ni ser penado sin juicio previo.»

(¿Cuáles son los jueces y cuáles los juicios de la Constitución? Los del poder judicial de la Nación, establecido para todos los habitantes, por igual. Ninguna ley puede excluir á los extranjeros de esos jueces y de esos juicios).

«Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.»

«Todos los habitantes son iguales ante la ley.»

«Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano.»

«Ningún habitante de la Nación será obligado á hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.»

«El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias. Actos de esta naturaleza sujetarán á la responsabilidad y pena de los traidores á la patria.»

Así se expresa la Constitución. Es, por consiguiente, otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, darle las del proyecto.

Sr. Pérez—¿Y nosotros resultaremos traidores á la patria?

Sr. Mantilla—Según la Constitución.

Sr. Pérez—Según la interpretación del señor Senador.

Sr. Mantilla—Nó; yo no interpreto, cito y leo la Constitución, que vale más que interpretarla. Ciego será el que no la lea conforme está escrita.

«La tierra argentina está abierta para todos los hombres del mundo, que quieran habitar en ella»—dice el preámbulo de la Constitución. Según el proyecto no lo estará ya...

Sr. Uriburu (F.)—No estaría abierta para los facinerosos.

Sr. Mantilla—Perfectamente. Para eso son las leyes fundamentales de la administración de la justicia en la República; el poder judicial enjuicia y castiga á los facinerosos.

Correspondería, tal vez, este proyecto, si careciésemos de leyes, de jueces, de poderes públicos equilibrados; si fuera verdad lo que de nuestra justicia dijo mal una vez el Presidente de la República en uno de sus mensajes de inauguración. Felizmente, la República Argentina tiene leyes y jueces como los mejores de otras partes, y según ellas y por ellos deben ser juzgados y castigados los extranjeros.

Un país donde los extranjeros son necesarios, donde gozan de los mismos derechos y libertades civiles que los nacionales y son admitidos en los em-

pleos públicos sin más condición que la idoneidad, habiendo entrado en el territorio bajo la protección terminante de nuestra Constitución, no hay derecho, no hay justicia para dejarlos al arbitrio del poder ejecutivo.

Nada mejor puedo presentar en confirmación de mis ideas que las opiniones de jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América, reproducidas en el libro del doctor Cané. Las adapto al caso, como razonamientos míos, porque le cuadran. Fueron emitidas con motivo de la ley de expulsión de los chinos.

Del juez Brewer—Los extranjeros contra quienes va dirigido el proyecto «son personas con residencia legal; cualquiera de ellas está bajo la protección de la Constitución y defendida por sus garantías contra la opresión y la injusticia; se les priva (por el proyecto) de libertad y se les impone castigo sin el debido proceso de ley y sin tener en cuenta las garantías constitucionales». Se funda la última proposición en que:

«Deportación es castigo: contiene primero arresto y privación de libertad; segundo, remoción del hogar, separación de familia, del negocio y de la propiedad. Si la deportación es un castigo exige un juicio previo, según el principio constitucional que nadie será privado de su vida, libertad ó propiedad, sin el debido proceso de ley. Ninguna persona que ha entrado en el país bajo la protección de la Constitución puede ser castigada sin debido juicio. Cuando está comprendido en la cuestión el derecho de libertad y residencia se requiere otra protección que la mera discreción de un empleado. Si la facultad (las del proyecto) existe, ¿quién garantizará que mañana ella no será ejercida contra otra clase y otra gente? Si las garantías de la Constitución pueden ser ignoradas á fin de deshacerse de una clase detestable, ¿qué seguridad tienen otras de que igual determinación no será tomada mañana contra ellas?»

Del juez Field—«Si los extranjeros no tuvieran derecho bajo el imperio de la Constitución, no sólo podrían ser desterrados, sino también castigados con la pena capital, sin jurado (sin jueces, aquí), sin requisito alguno de juicio. La Constitución, sin embargo, protege indistintamente á los ciudadanos y á los residentes extranjeros. La ley (el proyecto) viola los preceptos constitucionales respecto al arresto y privación de libertad, que, por la Constitución, no se puede dejar al arbitrio de un empleado.»

Del juez Fuller—«Los principios constitucionales que garantizan la libertad y la propiedad son comunes en su aplicación á todas las personas dentro de la jurisdicción territorial, sin consideración á diferencia alguna de raza, color ó nacionalidad. Las medidas establecidas (por el proyecto) contra los chinos (extranjeros) residentes atribuyen una función judicial á simples particulares (al poder ejecutivo) é infligen castigo sin debido juicio. Esta ley (este proyecto) es una *sentencia legislativa* de destierro.»

Me parece que son concluyentes, para mi tesis, estos argumentos reproducidos textualmente.

Declaro que no me opongo al pensamiento de dictar una ley de defensa nacional ó social contra los malos elementos que vengan del extranjero, ó de expulsión, como ley penal normal, contra los ya residentes en el territorio, siempre que, en uno y otro caso, no sean comprometidos los principios, los derechos y las libertades proclamados por la Constitución.

He dicho.

Sr. Cané—El hecho de haber pedido la palabra simultáneamente con el señor Senador por Corrientes revela que no era mi intención, por cierto, el reemplazar al señor Senador por Jujuy en la defensa de este proyecto, porque, precisamente, dicho señor Senador es de los que menos necesidad tienen de ayuda.

Quería simplemente, y me será permitido hacerlo antes de contestar alguna de las observaciones hechas por mi distinguido colega el señor Senador por Corrientes, para liquidar esta deuda de gratitud, agradecer profundamente, así como al señor Senador por Jujuy, los conceptos inmerecidos que han tenido al hablar de un pequeño trabajo que hice cuando presenté este proyecto.

Mi propósito al hacerlo, y pido permiso á la Cámara para referirme á él, era decir, por qué había presentado este proyecto.

Este proyecto fué presentado hace dos años, no uno, y vale decir que de ninguna manera tuve en vista la situación que actualmente ha determinado la necesidad y la urgencia misma de su sanción. Nó; tenía en vista cuestiones de orden más general.

Llegaba de Europa, donde he pasado un largo período de tiempo. Allí había visto funcionar los gobiernos y administraciones políticas y había tratado de aprender en escuelas mucho más viejas que la nuestra y que habían tenido ocasión de estudiar todos los problemas políticos y sociales con mayor profundidad que nosotros; había, como digo, procurado aprender todo lo que me fuera posible, para tratar, una vez de regreso en mi país, de utilizar, para él, lo que hubiera conseguido adquirir.

Allí no había un solo país de la tierra, desde la liberal Inglaterra hasta los libérrimos Estados Unidos, que hubiera renunciado á esta preciosa prerrogativa de la soberanía, que consiste en defender siempre el principio inmutable, el principio nacional. Es una herencia de los viejos tiempos, señor Presidente, y una herencia que siempre será una causa determinante, mientras persista sobre la tierra la naturaleza humana en sus condiciones actuales.

El hombre trata de defenderse; la sociedad trata de defenderse, y, á pesar de todos los sueños, la humanidad no forma ni formará jamás una sola fa-

milia. Los pueblos tienen que defenderse no sólo uno contra otro, sino los intereses de uno contra los intereses de los demás; y es precisamente la gran conquista de la civilización, que, en ese choque de los pueblos é intereses, el extranjero haya cesado de revestir el carácter de enemigo, que por definición tenía en la antigüedad.

Hoy en Europa, es simplemente el extranjero; pero no es el hermano, no es el hijo del suelo, no es el copropietario de la tierra que no ha contribuido á formar de ninguna manera.

Todos esos países á que me he referido, precisamente para evitar leyes y medidas de excepción, han previsto el caso de que fueran extranjeros los que determinaran las situaciones sociales y políticas en que pudieran ser necesarias esas medidas de fuerza, esas medidas de represión.

No hay un solo país, uno solo, que haya renunciado al derecho de defenderse por la expulsión, y no hay un solo tratadista que haya renunciado ó que piense que no es de derecho estricto el ejercicio de ese derecho.

Al pasar, contestaré al señor Senador por Corrientes, á quien le pido que tenga la bondad de remitirme el proyecto—porque todos, tomados de improviso, estamos en el mismo caso de él—para contestar lo que ha dicho respecto de los Estados Unidos; me limitaré para esto, á leer las conclusiones generales de la Suprema Corte de los Estados Unidos, después del debate á que se refería el señor Senador.

Sr. Mantilla—Advierto al señor Senador por la Capital, que yo no pongo en duda el derecho de expulsión: he dicho que lo acepto.

Sr. Cané—Pero hace suyas las conclusiones del miembro de la Corte de los Estados Unidos, Drewer, que niega ese derecho al Congreso de su país.

Sr. Mantilla—Nó, señor.

Sr. Cané—Lo acaba de leer el se-

ñor Senador. Le niega su voto por tres razones, y, si no fuera á fatigar á la Cámara, volvería á hacer la lectura hecha por el señor Senador.

Lo que quería simplemente decir era que la Suprema Corte no ha declarado sólo que la ley dictada por el Congreso de los Estados Unidos respecto á la expulsión de los chinos era legal, ha declarado lo siguiente. He aquí las conclusiones sancionadas por la Suprema Corte de los Estados Unidos, de la que formaban parte los jueces nombrados por el señor Senador por Corrientes y que votaron en disidencia y en minoría.

1º—«El derecho de excluir ó expulsar extranjeros, ó cualesquier clase de extranjeros en absoluto y bajo ciertas condiciones, en tiempo de guerra ó tiempo de paz, es un derecho inherente é indiscutible de toda nación soberana é independiente.» No puede haber una declaración de carácter más general.

«En los Estados Unidos, el derecho de excluir ó expulsar extranjeros pertenece á los departamentos políticos del gobierno nacional. Debe ser reglamentado por tratados, por un acto del Congreso y puesto en práctica por la autoridad ejecutiva de acuerdo con los reglamentos así establecidos, excepción hecha en los casos que el departamento judicial esté autorizado por tratados ó estatutos ó su intervención es requerida por la Constitución».

Sr. Mantilla—Estatutos, ¡ahí está!

Sr. Cané—Esta es la declaración de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la leo con placer; porque, ya que tanto malo hemos tomado de las prácticas constitucionales norteamericanas, quiero que también tomemos lo que es justo.

Nuestra Constitución no puede oponerse, ni se opone de ninguna manera, á la sanción de un proyecto que reglamente y ponga en ejercicio el derecho de expulsión.

Por otra parte, el señor Senador por Corrientes lo ha reconocido, y, á pesar

de las citas que ha hecho, ha concluido por creer que realmente ese ejercicio es un derecho de soberanía.

Recordaré simplemente, señor Presidente, para todos los que hacen un argumento de la Constitución, el artículo 25, que es el fundamental en este caso y que dice:

«El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros.»

¿Concluye ahí el artículo? No. Ahí concluiría si la tierra argentina estuviera abierta sin excepción para todos los hombres del mundo y si los constituyentes del 53 hubieran renunciado en absoluto al derecho de defensa. La Constitución agrega «que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias é introducir y enseñar las ciencias y las artes».

Esos son los extranjeros que no pueden ni deben ser expulsados; esos son los que serán siempre defendidos por un poder más alto que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial; ese poder será el poder social, el poder de la opinión pública, que jamás permitirá á un magistrado argentino, á un presidente de la República expulsar á un extranjero honorable cuya permanencia en nuestro suelo sea un timbre de honor y de utilidad para nuestro país.

Otra de las razones que me hizo presentar este proyecto fué que durante mi permanencia en Europa, ejercitando funciones políticas en representación de mi país, más de una vez se me mostraron documentos que probaban que muchos de los anarquistas más peligrosos, de aquellos que llevan su propaganda hasta el crimen, habían permanecido largo tiempo en la ciudad de Buenos Aires y reunido los recursos necesarios para ir más tarde á perpetrar en Europa estos crímenes que han producido horror en la

Yo no deseo, señor Presidente, que sea dentro de nuestro país donde se forgen las armas que han de atravesar el corazón de una mujer, como el de la Emperatriz de Austria, ó romper corazones tan nobles como el de Humberto de Saboya. Yo no deseo, señor Presidente, que mi tierra adquiera el renombre de ser el refugio de todos los criminales del mundo.

Esta ley, como ha dicho el señor Senador Pérez, no ha sido inspirada y dictada contra las huelgas; yo creo como él que nada es más legítimo que el ejercicio de la huelga, como medio de defensa del trabajo contra el capital que abusa.

Más de una vez los representantes de las huelgas han de venir á golpear las puertas del Parlamento argentino en demanda de justicia y creo, señor Presidente, que en cualquier momento, nos encontremos aquí los presentes ó vengán otros á substituirnos, siempre han de encontrar acogida simpática y oídos atentos para escuchar las quejas y tratar de aliviarlos en sus males.

Nosotros no somos enemigos de las huelgas, nosotros no podemos ser enemigos del trabajador que está elaborando nuestras tierras, fecundando nuestro suelo y en quien todas nuestras esperanzas están fundadas.

De quien somos enemigos, señor Presidente, es del enemigo de los trabajadores, es de aquellos que vienen á distraerlos de la vida del trabajo; son los enemigos del que viene á mostrarles que su destino miserable es la obra de los poderosos de la tierra; del que viene á inculcarles doctrinas de odio y á ponerles en el corazón el veneno que no sólo emponzoña su vida, sino también la de su hogar entero.

Contra esos es contra quienes va esa ley, y por eso quiero armar al Poder Ejecutivo de la manera que están armados todos los ejecutivos del mundo civilizado: de los poderes necesarios para arrancar de raíz y al nacer esa

planta, y evitar que venga á infestar nuestro suelo.

Señor Presidente: no pensaba yo que en este momento se tratase esta ley, que debía haberse dictado, como decía el señor Senador por Corrientes, con calma y tranquilidad, haciendo un amplio debate sobre la multitud de las fases que ella presenta, que él ha enunciado, y cuya gravedad no se me oculta.

Creo que si la sancionamos en este momento es porque servirá para el porvenir y no sólo para el presente. Creo que esta ley no tendrá un efecto inmediato sobre las huelgas actuales; yo creo que es otro el medio que tiene el Ejecutivo en sus manos — medio sobre el cual he hablado accidentalmente con uno de los miembros del Poder Ejecutivo—para volver la calma á esta ciudad y volver la tranquilidad á los millares de trabajadores que después de diez años de espera encuentran hoy que la cosecha, que parecía una bendición del cielo, se va á convertir en una desgracia; porque no hay mayor desgracia que ver el esfuerzo del trabajo de tantos años destruido por una causa absurda y evitable.

Hoy, lo que el Poder Ejecutivo debe hacer, es lo que se hace en casos análogos en Europa, en las naciones que nos dan el ejemplo en estas y otras muchas cosas: dictar el estado de sitio, ese estado de sitio á que se refería el señor Senador por Corrientes, y que no incomoda sino á quien debe incomodar, y que permitirá al Poder Ejecutivo, hacer lo que hizo Waldeck Rousseau en Francia y Zanardelli en Italia,—hombres de principios liberales y que son un honor para nuestra raza latina,—llamar á los representantes de todos los gremios y decirles: «Yo, Poder Ejecutivo, no soy enemigo de los obreros, no soy opositor de las huelgas; soy el primero en reconocer sus derechos y deseo ayudarlos; pero, necesito conocer lo que realmente existe en el fondo de estos con-

—¿Quién es usted?

—Soy un estibador á quien están explotando cuatro contratistas que se comen la mitad de mi trabajo.

—Examinaré su caso y el de los otros, y con el poder que la sociedad me ha dado aconsejaré y trataré de que su patrón entre en arreglos.

Pregunta á otro:

¿Usted quién es?

—No soy obrero, soy redactor de un periódico de doctrinas avanzadas.

—Usted se va fuera del país, porque yo no necesito inútiles de profesión: no tengo necesidad de que al obrero se le indique lo que tiene que ser.

Se expulsa, pues, á los que tienen que ser expulsados y se ampara á los que deben ser amparados.

—¡May bien!

Sr. Mantilla—Pido la palabra.

Contestaré al señor Senador por la Capital, principiando por donde él ha terminado: las huelgas.

Si la ley no responde, conforme ha dicho, á la necesidad del momento—el conflicto de las huelgas—; si ella es para lo porvenir ¿cuál es el motivo de la precipitación con que la tratamos?, ¿por qué el empeño en sancionarla ahora? Huelga el apuro.

Si las medidas que cuadran á la gravedad de la situación no surgirán de esta ley sino de otras ¿por qué no echar mano á esos medios y dejar el proyecto para su debida oportunidad?

Sr. Urburu (F.)—Porque lo hemos dejado dos años y basta ya.

Sr. Mantilla—Esa sería una razón más para postergarle; porque si durante dos años no hemos adobado lo suficiente nuestra inteligencia para dictar una buena ley ¿cómo hacerlo bien ahora?

Sr. Urburu (F.)—No la adobaríamos en un siglo.

Sr. Mantilla—Error.

Las huelgas, señor Presidente, no son de suyo sucesos aterradores; un motivo explicable, una defensa natural puede producir las sin pasar los límites pru-

dentes que las mismas leyes generales toleran á los extravíos del hombre. Cuando el extravío excede á las tolerancias discretas, él cae bajo el imperio de la legislación policial ó penal, y los poderes encargados del mantenimiento del orden público tienen atribuciones y facultades normales para la aplicación de aquella.

Yo reconozco perfecto derecho al individuo para dejar un trabajo que no le conviene, siempre que el contrato de locación de sus servicios no le obligue á continuar la tarea; pero ninguno puede legalmente faltar á sus compromisos, ni impedir que trabajen los que desean hacerlo. Cualquiera de estos hechos constituye infracción, en el individuo como en la colectividad, y da lugar á que policial ó judicialmente sean garantidos en sus derechos los ofendidos, y reprimidos y castigados los ofensores.

Con este criterio, entiendo que el Gobierno y los tribunales, la policía sola, disponen de medios suficientes para contener las irregularidades del día. Más facultades al primero, y éstas hirientes al mecanismo de nuestras instituciones, extraordinarias, me parece innecesario, inconstitucional y peligroso.

Nuestro poder ejecutivo, como todos los de Sud América, posee atribuciones y facultades mayores que el Presidente de Francia y el Rey de Inglaterra; las extralimitaciones (de toda la vida) las aumentan. El contrapeso de ellas es la división de los poderes del Estado. Esta barrera caerá ahora entregando al poder ejecutivo lo que corresponde al departamento judicial, y él será omnipotente. Más tarde nos arrepentiremos de haber violentado tan profundamente nuestro equilibrado régimen político.

Yo no tengo miedo á los extravíos de la libertad, porque los beneficios de ella son siempre grandes y reparadores; pero, sí, recelo constantemente de los abusos del poder, sobre todo en Sud América, donde hay inclinación al poco respeto de la ley. La previsión de los

constituyentes argentinos amparó bien á la libertad poniendo muy lejos del poder ejecutivo la aplicación de las leyes por mano de la justicia. Cuando veo que esto se olvida, me alarmo y resisto.

No pesa en mi espíritu la circunstancia ó antecedente de que las facultades conferidas por el proyecto al Poder Ejecutivo están concedidas á los de la misma naturaleza en los países europeos; porque las condiciones políticas y sociales de la Europa son completamente diversas de las nuestras. En esta materia, lo regular en Francia, en Italia, en Alemania, no lo es en la República Argentina.

Las leyes y los decretos en Francia aplicados á la expulsión de extranjeros son, si mal no recuerdo, de épocas monárquicas.

Sr. Cané—Las aplicó la República con más frecuencia que la monarquía.

Sr. Mantilla—República nó como la nuestra.

En la constitución francesa no existe esta cláusula de la argentina: «La República está abierta para todos los hombres del mundo.» En la constitución francesa no están equiparados los franceses á los extranjeros como éstos lo están á los argentinos por la nuestra.

Sr. Cané—En el derecho civil.

Sr. Mantilla—Aquí en mucho más; me refiero al derecho civil, á las garantías, á las concesiones antes por mí mencionadas, que no tiene la constitución de Francia.

Seguramente no es de derecho civil el desempeño de la secretaría de la Suprema Corte de Justicia y el de funciones públicas importantes en todas las ramas del Gobierno: es de derecho político; sin embargo, aquí llegan á esos puestos los extranjeros: en Francia nó. Las aduanas de la República tienen más de doscientos orientales; el correo, de quinientos á mil españoles...

Sr. Cané—Los tendrían.

Sr. Mantilla—Los tienen.

Sr. Cané—No puede tenerlos, porque la ley militar que hace poco votó el señor Senador obliga á todo empleado á presentar su boleta de enrolamiento, lo que importa su carta de ciudadanía.

Sr. Mantilla — Yo no voté la ley militar.

Sr. Cané—Pero no por eso deja de ser ley.

Sr. Mantilla—No recuerdo bien los términos de la ley militar; pero sí los de la Constitución, superior á ella.

El artículo 16 de la Constitución establece la admisibilidad de los extranjeros en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. Se ha llevado, en esto, la tolerancia á tal extremo, que extranjeros han sido ministros de la Nación, diputados y creo que hasta senadores.

Estos hechos no ocurren en Francia.

Las leyes sobre expulsión de extranjeros, que responden á un estado político y legal distinto del nuestro, no son aplicables aquí, donde los extranjeros y los argentinos tienen garantías, derechos y tribunales iguales, de los que constitucionalmente no pueden ser privados los primeros.

La rectificación hecha por el señor Senador doctor Cané á mi referencia, al fallo de la Corte norteamericana, no la desautoriza. Dicho fallo hace expresa excepción «de los casos en que el departamento judicial está autorizado por *tratados* ó por *estatutos* (leyes) á intervenir ó su intervención es requerida por la Constitución». El mismo señor Senador ha leído esto. Luego está comprobada mi afirmación de que la sentencia *no ha declarado* que sea *genuino* y *privativo* del Poder Ejecutivo la aplicación del derecho de expulsión de extranjeros.

Con lo dicho y cuanto pudiera agregar, no definiendo á los extranjeros bandidos á quienes se refería el señor Senador. Tomo la denominación extranjero en abstracto ó general, y digo: el que

ha venido á la República Argentina atraído por la Constitución, bajo el amparo de las garantías que ella acuerda, y está sometido á las leyes comunes que protegen á los habitantes, tiene derecho indiscutible para no ser entregado al capricho del Poder Ejecutivo, por medio de una ley política de excepción.

El extranjero culpable, el perturbador del orden público, pertenece á la justicia como el argentino de la misma condición. ¿Por qué quitárselo y entregarlo al gobierno, para un castigo, cuando el último «no puede ejercer funciones judiciales»? Vamos rápidamente olvidando la seriedad de los contrapesos de los poderes, la separación sabia de sus funciones propias, y caminamos hacia un orden de vida diametralmente opuesto al de la Constitución.

Más que de los huelguistas debemos preocuparnos de no incurrir en el olvido señalado. Contra los huelguistas están la policía, el gobierno, los jueces, las leyes penales, que no imagino son impotentes; contra las desviaciones de los principios constitucionales nada hay, una vez producidas.

Convertido que fuere en ley el proyecto, participaré de la responsabilidad del Senado; pero tengo la convicción de que nunca será justificada la ley ante la conciencia serena de los hombres públicos de mi país, cuando la estudien con madurez en relación á las terminantes disposiciones constitucionales que por ella son en mi concepto vulneradas.

He dicho.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

Si esta ley no responde á la situación actualmente creada por estos movimientos casi anárquicos, diré; si es para el futuro, como fué el pensamiento que tuvo el autor del proyecto, me parece que ella debería seguir el trámite reglamentario, pasando á la orden del día, para dar tiempo á que se forme el suficiente criterio y podamos estudiarla y votarla con conciencia.

Y, por otra parte, no se explicaría la premura por sancionarla.

Si, como yo pienso, el apuro proviene de que se quiere aplicar y corregir los movimientos subversivos que se dibujan con motivo de las huelgas, me parece que lo más eficaz sería declarar el estado de sitio; porque leyes de carácter permanente y de la naturaleza de la que se proyecta deben discutirse y meditarse con toda serenidad y amplitud.

Los señores senadores que me han precedido en la palabra, con excepción del miembro informante, han dicho que lo eficaz, para prevenir el mal que se dibuja, sería el estado de sitio; y esperaba que los ministros del Poder Ejecutivo dijieran alguna palabra al respecto proponiendo el estado de sitio, para no parecer convidados de piedra.

Yo he de votar, pues, en contra de esta ley que se quiere sancionar á escape, cuando hay medios constitucionales que se han empleado entre nosotros por hechos análogos, como durante los sucesos de junio, cuando la unificación, en que se declaró el estado de sitio.

¿Por qué no lo declaramos ahora, en vez de buscar el remedio de carácter permanente, en leyes de dudosa eficacia para corregir el mal que se teme?

Dos años hace que se presentó este proyecto, sin que las comisiones lo hubieran despachado, lo que demostraba la gravedad de él, y ahora se resuelve discutirlo y votarlo sobre tablas, sin que tenga tiempo ni para meditar sobre el alcance de sus disposiciones.

Por estas breves consideraciones votaré en contra.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

No voy á hacer tampoco un debate sobre esta cuestión, dada la ilustración con que ella ha sido ya tratada y la hora un tanto apremiante para la sesión del honorable Senado.

Debo decir solamente que esta ley será de resultados muy benéficos, desde

que tenga un principio de aplicación, desde el momento de su sanción.

No creo que sea todo el remedio que las huelgas requieran; pero, tampoco la gravedad de las mismas es tan grande que requiera medidas extraordinarias, excepcionales, como las que comporta el estado de sitio, que acaso sea necesario momento más, momento menos. Pero esta ley debe ser aplicada inmediatamente, y, como ha dicho muy bien el señor Senador por la Capital, ella no va dirigida contra los huelguistas—y no analizaré este fenómeno que, á la luz de ciertos principios nuevos, sale un poco del límite expreso de nuestras leyes vigentes; se trata del hecho colectivo, aún no legislado por nuestras leyes civiles, comerciales y penales, por lo menos bajo la forma en que se presenta en estos últimos tiempos. Pero esta ley va á remediar en gran parte los males actuales.

El Poder Ejecutivo tiene en sus manos los medios de conocer la verdad de la situación; sabe qué clase de personas, más ó menos, son las que deben caer bajo su imperio y sabe perfectamente que no son los trabajadores, ni son los hombres de negocios; son unas cuantas personas que hacen profesión de perturbar el orden público, comprendido en estas palabras el ejercicio sereno, regular de la Constitución.

No voy á entrar en mayor disquisición para demostrar lo que, á mi juicio, son errores á que el patriotismo siempre acendrado del señor Senador por Corrientes lo conduce al interpretar los puntos fundamentales de nuestro régimen político.

Decir que es una ley política no significa que es una ley destinada á armar al poder político de facultades extraordinarias: se dice así, como se entiende en toda la jurisprudencia de los tribunales nacionales y extranjeros, por contraposición á la ley civil, judicial, en su sentido estricto; y se dice ley de ex-

cepción por la misma razón, porque esa ley que se pide, comparada con las leyes de derecho común, no es de ese carácter.

Y al hablar de facultades extraordinarias, se me permitirá brevemente también contestar al señor Senador por Corrientes, cuyo patriotismo, como he dicho, siempre acendrado, lo lleva á magnificar los peligros que él ve cercinarse acaso sobre el porvenir del país.

Las facultades extraordinarias importan la supresión del poder legislativo, la supresión del poder judicial, para crear una dictadura de las que las antiguas legislaturas otorgaban al tirano Rozas, época perfectamente pasada ya, fuera de la que puede caber dentro del marco de nuestra civilización actual y mucho menos dentro de la civilización futura.

No habría indudablemente un solo Presidente de la República, un solo hombre público argentino que se crea ya autorizado á abusar del poder político que las leyes ponen á su alcance, y aunque el abuso está siempre en la naturaleza humana. El medio ambiente de la cultura y civilización del país atan las manos aun á los criminales, cuando éstos no han nacido para el crimen en la esfera privada. De manera que son peligros imaginarios que sólo se ven bajo la presión de ideas adquiridas y de las que siempre es penoso y difícil desprenderse, aun cuando veamos el medio ambiente transformarse y la sociedad marchar mucho más á prisa que lo que suele marchar el pensamiento y las ideas de los hombres de gobierno.

El Poder Ejecutivo ha creído que bastaba por este momento la sanción de esta ley que hace dos años se encuentra puesta á la meditación del Senado, y que ella va á ser de benéficos resultados aplicada inmediatamente como deberá serlo y con la protesta que formulo en nombre del Poder Ejecutivo, de que en ningún momento ella pueda ser empleada como arma para

cometer abusos, en vez de mejorar los males que la situación actual ha creado. Esta ley es, como digo, para evitar los abusos de estas clases trabajadoras, no siempre conscientes de su derecho personal ó colectivo, que son movidas por agitadores de oficio perfectamente conocidos en las luchas contemporáneas.

No creo, para concluir, que debamos aplicar como términos expresos é imperativos las frases contenidas en el preámbulo de la constitución, desde que él sólo sirve para explicar, en momentos de obscuridad de la ley y de los preceptos, la intención de los que formularon el estatuto fundamental.

Por lo demás, la hospitalidad que el país ofrece al extranjero, está dicho en la palabra: hace de éste un huésped; y, un huésped, bajo el reinado de la cultura y de la buena educación moderna, necesita también conformarse á las leyes de la casa, al régimen de la familia; y no veo que haya un solo padre de familia, un solo propietario de un hogar que admita á un extranjero, á un amigo en su casa, que por su conducta ó hechos como huésped, abusando de las leyes de la hospitalidad y de la confianza, se permita perturbar la paz del hogar y las serenas relaciones de la familia.

No se trata, señor Presidente, con esta ley de imponer una pena; se trata simplemente de decirle al extranjero que no quiere conformarse con las reglas de nuestra cultura y nuestra civilización, que ha cesado su derecho de permanecer en el país y que busque otro ambiente donde sus ideas sean más propicias. Tampoco significa devolver al extranjero al país cuyos tribunales lo han condenado; por lo tanto, los que quisieran confundir este derecho de expulsión ó deportación del extranjero con lo que comporta la extradición, cometerían una confusión lamentable, porque no se devuelve el extranjero al país que no lo reclama; se le muestra simplemente la frontera del

país cuya hospitalidad no ha sabido honrar.

Por consiguiente, no hagamos confusión de derecho común, de derecho penal, que no tiene aplicación en esta medida.

Se trata del ejercicio de facultades políticas, que todos los tratadistas de derecho constitucional, de derecho internacional distinguen perfectamente. Los primeros separan los llamados actos de gestión de actos de gobierno, y entre los actos de gobierno calificados está precisamente la expulsión de los extranjeros que no se conforman á las leyes del país.

Sr. Aparicio — ¿Y en qué artículo de la Constitución encuadra esa disposición?

Sr. Ministro del Interior — ¿En qué artículo? En todos los artículos de la Constitución que rigen los derechos de los extranjeros y de los hijos del país.

Sr. Aparicio — No hay ninguno que dé esa facultad al Poder Ejecutivo.

Sr. Ministro del Interior — ¿Cuál facultad? El artículo 25, que se ha citado, establece claramente la distinción entre el extranjero que viene á labrar la tierra y á contribuir al progreso del país. Por otra parte, hay principios elementales que están debajo y encima de la Constitución, que son los principios que informan toda ley humana, que son los de la hospitalidad, de la buena crianza, de la cultura, que no están excluidos de la Constitución.

Sr. Aparicio — Pero, para hacer efectivas esas leyes, están los tribunales — no el Poder Ejecutivo.

Sr. Ministro del Interior — Voy á decirle al señor Senador, ya que se hace referencia á las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que no son sólo las citadas, sino muchas más: se confirma allí de una manera irrevocable el derecho del país, como incidente de su soberanía, á excluir al extranjero que no se conforme á la vida

social, política y legal del país. Y, en segundo lugar, que este derecho de expulsión corresponde al poder político ejercido por el Presidente de la República, que es el supremo jefe político del país.

No se trata, por consiguiente, de imponer penas. Y ese es el fundamento de este poder discrecional, desde que se trata generalmente, en estos casos que cita el proyecto, de extranjeros ya condenados por los tribunales de su país y cuyas sentencias deben ser reconocidas y admitidas en los países extranjeros amigos. Y, en cuanto á los que no tengan esta condena y que residan en el país y visiblemente perturben el orden público, caen bajo las facultades policiales, perfectamente encuadradas dentro de las facultades policiales del Presidente de la República; y así lo han reconocido los habitantes de los Estados Unidos sin necesidad de mayores ni grandes discusiones al respecto; puesto que no se trata de imponer una pena, no se trata de limitar la personalidad civil de los extranjeros. Y si se tratara de derechos políticos no se rozarían con él, puesto que el extranjero sólo ejerce los derechos políticos que las leyes del país le acuerdan, leyes que hace el dueño de casa, el soberano del territorio.

Mi objeto sólo era demostrar al honorable Senado la necesidad y quizá la urgencia de esta ley, si nó para dominar todo el mal que en este momento asoma, por lo menos para evitar que él tome mayores proporciones y evitar también, si es posible, de apelar á medidas mucho más excesivas ó generales, como sería el estado de sitio, cuya necesidad reconozco en los momentos difíciles en que la fuerza ordinaria de la Nación no alcanza á sofocar todos los actos colectivos que pueden producirse.

He dicho.

Sr. Pérez — Pido la palabra tan sólo para decir dos, porque considero que la Cámara está fatigada; porque ya el debate se extiende demasiado.

Todos los argumentos que se hacen, señor Presidente, son para recordar las garantías que la Constitución acuerda al extranjero; se generaliza tanto la palabra extranjero que cualquiera diría que estamos dictando una ley contra los extranjeros, cuando, como se ha dicho muy bien, se trata de una ley contra los malos extranjeros, contra los criminales que vienen á perturbar la tranquilidad social y á buscar un asilo contra la persecución que se les hace en otras partes.

Señor Presidente: en este afán de aquilatar todos los preceptos de la Constitución, sólo se encuentra una interpretación para tratar de salvaguardar derechos de un gremio ó de una colectividad, sin tener en cuenta que hay de por medio algo más fundamental, que es la sociedad misma, que son esos mismos extranjeros, á los que, como he dicho antes, los que instigan esas huelgas, les originan tal vez mayores perjuicios que los que sufren los hijos de esta tierra.

Esta manera de apreciar la cuestión es peligrosa y á veces importa incurrir en contradicciones. Me basta recordar esto para contestar al señor Senador por Corrientes. Hace pocos meses se ha discutido largamente en esta Cámara, lo mismo que en la de Diputados, una ley contra el juego, y se han aducido los mismos argumentos de orden constitucional, los mismos argumentos de carácter legal, cuando se trataba de asignar la atribución de allanar los domicilios al Poder Ejecutivo, ó, mejor dicho, al Jefe de Policía, sacando de los jueces naturales esta facultad, puesto que el precepto legal es que el domicilio es inviolable y que no puede ser allanado sino en virtud de una orden escrita de juez competente.

Pero, se trataba de corregir un vicio, de disminuir un mal social; sin embargo, esa ley, violatoria, en mi concepto, de aquellos principios que garanten la

Cámara sancionó el dictamen de la Comisión que llevaba la firma del señor Senador por Corrientes.

Y yo digo ahora: hay algo más grave que el mal del juego; está en peligro la tranquilidad pública; están comprometidos todos los elementos de bienestar á que me he referido antes, y, entonces, nosotros invocamos la Constitución, invocamos las leyes, queremos, no digo ampliar, sino entregar la solución de estos asuntos á la autoridad judicial, que no puede ser rápida y oportuna porque tiene forzosamente que someterse á trámites que la ley le indica para resolver. No podemos decirle á la justicia nacional: «Sin forma de juicio, expulse á este agitador».

Sr. Mantilla—Y se lo dice al Poder Ejecutivo, que es peor.

Sr. Pérez—El Poder Ejecutivo lo puede hacer; los jueces nó, porque tienen leyes que reglamentan y que establecen el trámite á que deben someterse; mientras que el Poder Ejecutivo no tiene más trámite que el que le señala la ley, ni más criterio que el que le indique la gravedad de las circunstancias dentro de lo establecido en la misma ley.

Y yo pregunto al señor Senador si teme que el Poder Ejecutivo abuse en este caso, cuando de todas partes las miradas se dirigen á él; cuando todos los elementos conservadores del país están reclamando esta medida, para que todo vuelva á la tranquilidad y al estado normal.

El remedio que nos propone es que el Poder Ejecutivo decrete el estado de sitio.

Sr. Mantilla—Nó.

Sr. Pérez—El señor Senador por Catamarca y el señor Senador por Corrientes decían que era un medio práctico, expeditivo...

Sr. Mantilla—Yo no he propuesto.

Sr. Pérez—... de salvar las dificultades del momento.

Sr. Mantilla—No propuse.

Sr. Pérez—Sino lo ha dicho el señor Senador, contesto al argumento del señor Senador por Catamarca.

Se habla del estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? La suspensión de las garantías constitucionales.

Sr. Mantilla—¡Claro!

Sr. Pérez—Pero ¿cuáles son los efectos del estado de sitio después de la suspensión de las garantías?

Sr. Mantilla—Si pregunta, le contestaré.

Sr. Pérez—Estoy hablando en forma interrogativa; nó para que se me conteste ya.

Sr. Mantilla—¡Ah!

Sr. Pérez—En caso de conmoción interna ó ataque exterior que ponga en peligro esta Constitución y las autoridades creadas por ella, se declara en estado de sitio la provincia ó territorio donde existe la perturbación del orden, quedando suspendidas allí las garantías constitucionales; pero, durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas.

Sr. Mantilla—¡Ah!

Sr. Pérez—Ya se ve que el estado de sitio no es un remedio: su poder se limitará, en su caso, respecto de las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.

De manera que toda la facultad del Presidente de la República en el caso de que se declarara el estado de sitio, se reduciría á transportar de un punto á otro del país á todos esos elementos perturbadores, si es que ellos no prefirieran salir de él.

Ya lo creo que no van á preferir salir del país: van á preferir ir de Barracas al Norte á Barracas al Sur.

Sr. Cané—Hay la Isla de los Estados.

Sr. Pérez—Perfectamente, la Isla de los Estados. Pero como el objeto de

rio de la República esos malos elementos, sino de expulsarlos, de hacerlos salir de él, quiere decir que con el estado de sitio no se consigue eso, porque no lo faculta al Presidente de la República para proceder en ese sentido.

Ya se ve cómo el medio que se indica es ineficaz.

Esta ley no la dictamos por miedo, porque si así fuera, no la dictaríamos desde que los anarquistas, que probablemente son los directores de la huelga, nos están amenazando, por los medios que acostumbran hacerlo, para impedir que los poderes públicos tomen medidas de defensa en favor de la tranquilidad y del orden público.

Sr. Mantilla—Si me fuera permitido hacer uso de la palabra para rectificar al señor Senador...

Sr. Presidente—Sí, señor.

Sr. Mantilla—Como cargo, el señor Senador ha recordado que mi firma estaba al pie del proyecto de ley sobre juegos de azar, el cual tenía un artículo que daba al Jefe de Policía la facultad de ordenar el allanamiento de los domicilios. Si aquello se hizo en contra de un principio constitucional, dice el señor Senador, puede hacerse también esto en contra de otro principio constitucional, ó por lo menos el que firmó aquel despacho no se oponga á este.

El señor Senador se equivoca. El domicilio es inviolable siempre que no lo allane orden escrita de autoridad competente, y la autoridad competente es aquella á quien la ley le da la facultad. El Congreso no está limitado en sus atribuciones para cometerla al Jefe de Policía ó á cualquiera otra autoridad. No son equivalentes *autoridad y juez*. Pero, en el caso actual, la Constitución limita la acción del Congreso, porque prohíbe terminantemente que los habitantes sean sacados de sus jueces ordinarios, que sean castigados sin juicio, que el Poder Ejecutivo ejerza funciones judiciales. Luego, el recuerdo del señor Senador es completamente fuera de lugar.

El proyecto concede al Poder Ejecutivo de la Nación atribuciones que no son las consignadas ó deducidas de las propias de ese poder según la Constitución: atribuciones que por su naturaleza corresponden exclusivamente al departamento judicial. Se reúne, pues, en el Poder Ejecutivo, por esto que llamo transgresión á los principios (respetando todas las opiniones contrarias), atribuciones ejecutivas y judiciales, y se hace de él un poder omnímodo respecto á los extranjeros.

No es exacto lo que decía el señor Ministro del Interior sobre la naturaleza de la expulsión. Perdone que, no obstante ser él catedrático y yo ni aspirante á ese título, no acepte su juicio. «La expulsión no es castigo»—dijo. Si el destierro del territorio donde se vive, donde está el hogar, la propiedad, garantido en todo por la Constitución y las leyes orgánicas, no es un castigo ¿qué es?

Sr. Ministro del Interior—No es el destierro, es la deportación.

Sr. Mantilla—Y la deportación ¿qué es?

¿No dicen que la ley es contra los malos elementos y para librarse de ellos se les tomará y se los expulsará? Esto es castigar los actos de ellos. ¿El castigo no implica el juicio y el juicio no es por la Constitución del resorte de la justicia ordinaria? ¿Es esta facultad regular del Poder Ejecutivo? No.

Las facultades extraordinarias que la Constitución prohíbe conceder no son únicamente aquellas que tenía Rozas. Facultades extraordinarias, en el concepto de la Constitución, son aquellas que no corresponden á la naturaleza intrínseca del poder.

Sr. Ministro del Interior—Es el artículo 29, puramente histórico.

Sr. Mantilla—Una facultad del Congreso no puede ser delegada en el Poder Ejecutivo sin otorgarle una facultad extraordinaria; lo mismo que una facul-

tad propia del Poder Judicial no puede ser delegada en el Poder ejecutivo.

Bien; yo no me opongo á la ley de defensa, no me opongo á que se eche del territorio del país todos los elementos malos; me opongo á que se les aplique castigo sin ser juzgados según nuestras leyes, y á que se conceda al Poder Ejecutivo facultades que no le corresponden, ni deben corresponderle jamás.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar si se aprueba ó nó en general el proyecto.

—Se vota y resulta afirmativa de 12 votos contra 3.

—En particular se aprueba, sin observación, el artículo 1º.

—En discusión el artículo 2º.

Sr. Irigoyen—¿Qué proponía el señor Senador por Corrientes en reemplazo de este artículo?

Sr. Mantilla—Nada he formulado.

Habría propuesto que no sea el Poder Ejecutivo quien juzgue á los extranjeros.

Sr. Cané—Pido la palabra.

Necesito dar una pequeña explicación al señor Senador por Buenos Aires, por haber sido yo el autor de este artículo, que la Comisión ha tenido la bondad de tomarlo tal como tuve el honor de presentarlo. Yo entiendo, señor Presidente, dividir en dos la calidad de los extranjeros que podrán ser expulsados. Los primeros, por una medida que podría llamar de higiene, acordando al Poder Ejecutivo el derecho de expulsar, por decreto, á esos extranjeros á que se refería el artículo anterior, que eran los condenados ó perseguidos por tribunales extranjeros, y que, por lo tanto, para el Poder Ejecutivo había motivo de presunción de que eran elementos nocivos para el país; y, en el segundo artículo, que está en discusión, había consignado que el extranjero que pudiera ser sospechado de turbar la seguridad del Estado, la tranquilidad pública, sería expulsado por resolución del Poder Ejecutivo, tomada en acuerdo de ministros. Esta garantía la tomé de la ley belga,

á que se refería hace un momento el señor Senador por Corrientes, y que es la más moderna, y autoriza así al Poder Ejecutivo para, en acuerdo de ministros, resolver la expulsión de extranjeros de esta clase.

Esto se explica porque este extranjero que el Poder Ejecutivo puede expulsar, puede también no haber cometido ningún delito, calificado; en esto está la fuerza de previsión y precaución de esta ley.

Por el artículo 2º,—tratándose de un extranjero, respecto del cual el Poder Ejecutivo, por los medios que sólo él puede tener, y que nunca podría tener ningún juez, sabe que empieza su propaganda anarquista, disolvente ó criminal, sin haber cometido aún acto criminal de ninguna clase ni aun cuasi delito,—puede ser expulsado; cortándose así el mal de raíz, y al principio.

No le impone castigo ni pena, porque la pena tiene caracteres legales que no reviste la simple expulsión.

Por tanto, si he aceptado la supresión que ha hecho la Comisión, ha sido simplemente porque no le daba mayor importancia.

La única importancia que podrá tener esta ley para desvirtuarla, sería la intervención del poder judicial, porque jamás un juez podrá tener el espíritu político administrativo ni los conocimientos ni los datos suministrados por el mecanismo inferior del Estado para poder juzgar si un extranjero puede ser peligroso ó nó á la seguridad y á la tranquilidad pública.

Quería dar esta explicación al señor Senador por Buenos Aires.

Sr. Irigoyen—Me parece la redacción demasiado amplia. *Todo extranjero, cuya conducta pueda perturbar...* dice el artículo, y pienso que esto es demasiado lato. ¿Quién declara ese peligro? ¿quién fija los antecedentes de este hombre; porque ni de ellos se habla?

Sr. Cané—El Poder Ejecutivo única-

Sr. Irigoyen—El Poder Ejecutivo sería juez único; pero la verdad es que un hombre puede tener aptitudes para perturbar, y sin embargo no ponerlas en ejercicio.

Sería mejor modificar esta redacción diciendo: *todo extranjero que perturbe la tranquilidad pública*,—porque es necesario un hecho.

Sr. Cané—No hay inconveniente ninguno: la idea es esa.

Sr. Irigoyen—Comprendo que la idea es esa; entonces es necesario un hecho evidente, comprobable.

Sr. Mantilla—Pido la palabra.

A pesar de haber sido derrotado en la idea general, me permito presentar á la Comisión el siguiente artículo en substitución del 2º.

«El extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional, turbe el orden público ó la tranquilidad social, el que sea vago, el pervertido con escándalo, será expulsado del territorio, previa detención y juicio sumario que será sustanciado durante el plazo máximo de tres días, á petición fiscal, por el juez federal respectivo. No habrá recurso de la sentencia condenatoria.»

Sr. Pérez—Pido la palabra.

La Comisión, señor Presidente, acepta la indicación del señor Senador por Buenos Aires, doctor Irigoyen, en el sentido de establecer que la expulsión sea contra el extranjero que esté comprometiendo la seguridad nacional...

Sr. Irigoyen—Que perturbe...

Sr. Pérez—En cuanto á la del señor Senador por Corrientes, no la apoya.

Sr. Mantilla—Entra la justicia!

Sr. Pérez—Entra la justicia! Si el Presidente de la República también puede ser justiciero, sin incurrir eternamente en el abuso, como se supone.

Esto de creer que solamente los tribunales pueden hacer justicia y que el Poder Ejecutivo siempre ha de ser injusto ó arbitrario en sus resoluciones.

Sr. Mantilla—Es ejecutivo, no más.

Sr. Pérez—Pero puede ser justiciero...

Sr. Mantilla—Es únicamente *ejecutivo*, según la Bonstitución.

Sr. Pérez—Y en la ejecución de sus actos puede ser justiciero.

Sr. Irigoyen—Participo de la opinión del señor Senador por Corrientes: no creo que el Poder Ejecutivo pueda hacer justicia.

Sr. Pérez—En el sentido de fallar pleitos, es natural que nó; pero puede, por ejemplo, dictar un decreto que entraña un acto de justicia y equidad.

Sr. Irigoyen—Será un decreto administrativo; pero, administrar justicia, condenar, castigar, no puede hacerlo.

Sr. Pérez—No se trata de la justicia como poder del estado, sino simplemente de que los actos que él ejecuta dentro de sus facultades pueden ser ejecutivamente ajustados á la ley y al derecho.

Sr. Irigoyen—No hagamos discusión sobre este punto, y veamos de encontrar una fórmula mejor.

Sr. Presidente—¿La Comisión acepta la modificación propuesta por el señor Senador por Buenos Aires?: en vez de «*que pueda perturbar*», que perturbe.

Sr. Pérez—Que comprometa la seguridad nacional...

Sr. Irigoyen—Cuya conducta perturbe la seguridad nacional ó el orden público.

Sr. Presidente—Se va á leer.

—Se lee:

«El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional ó perturbe el orden público.»

Sr. Mantilla—Pido la palabra.

¿Comprenderá este artículo á los periodistas extranjeros que escriben en los diarios del país, cuando el Poder Ejecutivo entienda que sus escritos perturban el orden público?

Sr. Cané—Pido la palabra.

Ha sido mi intención, señor Senador, al presentar esta ley, armar al Poder Ejecutivo contra esos corresponsales de diarios extranjeros que, falseando conscientemente la verdad, como el señor Senador lo ha visto algunas veces, denigran á nuestro país y le causan perjuicios mucho mayores que lo que se supone.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo que se ha leído.

Sr. Irigoyen—Pido la palabra.

No estoy conforme con esas palabras: «comprometa la seguridad nacional». Un extranjero, cien, doscientos extranjeros no pueden comprometer la seguridad nacional.

Sr. Ministro del Interior—Si me permite... Un extranjero solo puede comprometer gravemente la seguridad nacional.

Sr. Aparicio—¿Y perturbar el orden público?

Sr. Ministro del Interior—El orden público y la seguridad nacional; puede cometer actos que cometidos por un ciudadano se califican de traición á la patria.

Sr. Irigoyen—Pero esa clase de actos quedan sujetos á las leyes especiales.

Sr. Ministro del Interior—No podría clasificarlos en este momento; pero un extranjero puede cometer actos que, respecto de un ciudadano, se califican, como he dicho, de traición á la patria: adquirir secretos de estado y venderlos, concitar contra el país fuerzas extranjeras; mil cosas puede realizar un extranjero que ponen en peligro inmediatamente la seguridad nacional.

Sr. Pérez—Puede ser un espía extranjero.

Sr. Ministro del Interior—Un espía mismo.

—Se vota el artículo y se aprueba, leyéndose el 3º.

Sr. Irigoyen—Desearía que se volviera á leer ese artículo.

—Se lee.

Noviembre 22 de 1902

Sr. Pérez—Este es el menos grave de los artículos, porque el Poder Ejecutivo, sin esta disposición, está ya facultado para impedir que entren al país ciertos extranjeros.

Sr. Irigoyen — Eso está previsto, me parece, en la ley de inmigración: no pueden entrar, por ejemplo, inmigrantes enfermos, peligrosos, etcétera.

Sr. Presidente—Se va á votar si se aprueba el artículo 3º.

—Se vota y resulta afirmativa, obteniendo igual resultado los artículos 4º y 5º.

Sr. Presidente—Ha terminado la consideración del proyecto. Queda levantada la sesión.

—Eran las 7 y 45 p. m

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.